

ÁNGELA CENARRO LAGUNAS

El largo siglo XX, plagado de convulsiones, también pasó por la comarca del Bajo Martín. Fue recibido con poco entusiasmo, algo comprensible en una provincia fuertemente marcada por el atraso y la dependencia económica. Aun así, la comarca quedó menos aislada que otras zonas de la misma al constituir una especie de cruce de caminos entre algunos territorios que mostraron durante esta etapa una considerable vitalidad, como Zaragoza, Tortosa y el Levante. Además, al estar vertebrada por la cuenca del río Martín, contó con la posibilidad de regadíos, lo que propició una importante actividad en torno a una agricultura basada en los cereales, el maíz, las hortalizas y los frutales, pero, sobre todo, el aceite y la remolacha.

En los albores del siglo XX, la comarca del Bajo Martín era un buen ejemplo de sociedad rural en la que podían percibirse algunos atisbos de modernidad. No es necesario insistir en que la mayor parte de la población vivía del sector primario (en Híjar, según cifras que proporciona Cándido Marquesán correspondientes a 1935, un 73,01%, frente al 10,41% del secundario y 16,56% del terciario). El predominio de la pequeña propiedad agraria era perfectamente compatible con la presencia de grandes propietarios que concentraban en sus manos el mayor porcentaje de riqueza rústica. Así lo demuestra Luis Germán con su análisis sobre la estructura de la propiedad de la tierra relativa al antiguo partido judicial de Híjar durante los años treinta: 360 medianos y grandes propietarios sumaban casi



Albalate del Arzobispo. Antigua noria y canal de riego

el 40% de la renta rústica y pecuaria, mientras el 60% restante se repartía entre un total de 11.212 pequeños e ínfimos propietarios agrarios. Parecidas proporciones podían encontrarse en algunas localidades, como Albalate del Arzobispo, donde 1.169 campesinos, el 82% del total, pagaban el 24,7% de la contribución, mientras 8 grandes propietarios reunían el 32,3% de la misma. En la capital de la comarca se ubicaban, además, algunos de los mayores propietarios de toda la región aragonesa, como J. Francisco Esponera Cabañero, las hermanas Dosset Vallespina y Rafael Muniesa Urriés.

Gracias a estos cálculos es posible comprender que incluso esas zonas donde los desequilibrios de la estructura agraria no eran llamativos con respecto a otras áreas de la geografía española podían albergar enormes diferencias sociales basadas en la propiedad. A lo largo del primer tercio del siglo XX se consolidó esa estrecha relación entre el poder social que proporcionaba la posesión de tierras y el poder político, gracias al mantenimiento de un sistema, el de la Restauración, que excluía deliberadamente a amplios colectivos sociales de la escena pública. La práctica electoral se había convertido desde mediados del siglo XIX en una especie de pantomima que garantizaba el ejercicio del juego político a una minoría, las oligarquías locales, a través de los cacicatos estables. No parece una casualidad que entre 1903 y 1923 Rafael Andrade Navarrete, del Partido Conservador, fuera diputado por el distrito de Híjar-Alcañiz de manera permanente, mientras hombres de tendencia radical y democrática, como Domingo Gascón, nunca pudieran conseguir un acta de diputado. Ahora bien, el caciquismo ha de verse como algo más que esa lacra que el sistema español arrastraba de forma similar a otros estados nacionales europeos de la época: era la manera de vertebrar una sociedad invertebrada, una fórmula gracias a la cual importantes sectores sociales accedían a los recursos materiales mientras se les excluía de la arena política. Su voz apenas se dejó sentir durante las primeras tres décadas del siglo XX, y su voto, comprado y asegurado por las elites locales, estuvo dirigido a perpetuar el sistema.

Las elevadas tasas de analfabetismo y la religiosidad popular, fomentada por una Iglesia que resultó ser la mejor aliada del Estado, hicieron el resto. En Híjar, según



Romería del Pan Bendito

el censo de 1930, había un 51,4% de varones y un 60,81% de mujeres que no sabían leer ni escribir, cifras que estaban tan solo ligeramente por debajo de la media española en el año 1900. El catolicismo tenía, además, múltiples facetas. No solo otorgaba una identidad colectiva que se reafirmaba a través de misas, ceremoniales y tradiciones que organizaban la vida cotidiana de la comunidad, como las procesiones de Semana Santa, sino que,

además, aportaba una amplia infraestructura asociativa. Esto hizo, por ejemplo, la potente Acción Católica, con sus distintas ramas masculina, femenina y juvenil. En 1929 la vitalidad del núcleo de Híjar, que venía realizando una intensa labor de proselitismo en los pueblos de la comarca, fue determinante para que se eligiera como sede de la II Asamblea Diocesana de las Juventudes Católicas de Zaragoza. Algo parecido sucedió con el sindicalismo católico, que contribuyó a articular la sociedad campesina. Controlado, como tantas otras cosas, por los grandes propietarios y promovido por el clero, consiguió satisfacer a los pequeños mediante lo que se ha denominado *mecanismos de enganche*, al facilitar el acceso a abonos, semillas...

Ahora bien, el anquilosamiento de la vida pública no significó un adormecimiento total. La sociedad del Bajo Martín presentaba algunos síntomas de modernidad, como el ferrocarril. En 1894 se puso en funcionamiento el trayecto entre La Puebla de Híjar y Samper de Calanda, y poco después esta localidad quedó conectada con Caspe. Al año siguiente se enlazó La Puebla de Híjar con Alcañiz. La comarca, pues, recibió al siglo XX con una buena red de comunicaciones que la conectaban con algunas de las principales capitales españolas. Además, en 1912 se construyó la azucarera de La Puebla de Híjar, que impulsó el cultivo de la remolacha, y que dejaría, a lo largo del primer tercio del siglo, una serie de conflictos entre la empresa y los cultivadores remolacheros. Otro síntoma de que llegaban nuevos tiempos era el asociacionismo. Los vecinos de la comarca vieron cómo se abrían, aparte de los sindicatos agrícolas, casinos, cooperativas, círculos liberales y conservadores... Eran centros de sociabilidad para las distintas clases sociales, que se iban configurando con nitidez. Y si bien solo algunas sirvieron para que se gestaran nuevos idearios políticos, como el republicanismo, en general consiguieron más adhesiones que las organizaciones de carácter obrerista. Buena prueba de ello es que la UGT solo arraigó en La Puebla de Híjar al atraer a los trabajadores de la azucarera a través del Sindicato Azucarero y de Alcoholes industriales, y que la CNT tuvo que esperar al año 1936 para contar con 47 afiliados en Albalate y 51 en La Puebla.



Samper de Calanda. Depósito de agua de la antigua estación de ferrocarril

El advenimiento de la II República en el Bajo Martín es un ejemplo de cómo en algunas zonas de la geografía española la primera democracia española se impuso desde fuera y no por las presiones que ejerciera una base social bien dispuesta a secundarla. Las cifras hablan por sí solas. A diferencia de lo que sucedió en el conjunto de Aragón y de la provincia de Teruel, donde, globalmente, triunfaron las candidaturas republicanas con una holgura que no dejaba lugar a dudas, en la comarca las elecciones municipales del 12 de abril sirvieron para poner de manifiesto la aplastante superioridad de los sectores más conservadores. Así sucedió en localidades como Híjar y Albalate del Arzobispo, en las que vencieron las candidaturas monárquicas con 12 y 10 concejales respectivamente. En realidad este triunfo fue el resultado de aplicar el artículo 29 de la ley electoral de 1907. En virtud de este, allí donde tan solo se presentara una candidatura, esta quedaría proclamada automáticamente, sin necesidad de concurrir a las urnas. Como en Híjar tan solo se presentó la que integraban los concejales que ya formaban parte del ayuntamiento nombrado a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, no se celebraron elecciones y su continuidad quedó garantizada. La República tardó un mes en proclamarse, y tuvieron que ser unos cuantos vecinos de Albalate los que se encargaron de hacerlo. Por el mismo procedimiento, en esta localidad se hizo con la alcaldía José Rivera, quien la había monopolizado entre 1912 y 1923. En suma, ni «revolución popular», ni desplazamiento de las viejas elites ni proclamación de la Niña bonita en un ambiente festivo».

Lo que vino después fue el resultado de dos tendencias contrapuestas que no tuvieron más remedio que encontrarse. El voto siguió ofreciendo un perfil conservador. Se confirmó en las elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1931 y, de nuevo, en abril de 1933, momento en el que se celebraron elecciones en los municipios donde se había aplicado el artículo 29, considerado el símbolo de la pervivencia del caciquismo. En estos momentos la coalición republicana socialista ya hacía aguas y, en cambio, las derechas se habían organizado de manera eficaz para competir electoralmente en una sociedad de masas. El triunfo fue para ellas

en Híjar y en Albalate, aglutinadas en este último en torno al Partido Radical. La tendencia se consolidó en las elecciones generales de noviembre, que dieron el triunfo a la CEDA y al Partido Radical en toda España, y de nuevo en las de febrero de 1936.

Pero la República fue un intento de modernizar España «desde arriba». Se trataba de imponer un proyecto reformista que resolviera los grandes asuntos pendientes: la reforma de la estructura de la propiedad de



Albalate del Arzobispo. Plaza de la Iglesia, con el ayuntamiento al fondo

la tierra, la separación Iglesia-Estado, la modernización del ejército, la educación laica y la «cuestión social». Se esperaba que mediante las reformas impuestas por el gobierno republicano se alcanzara la creación de una base social de ciudadanos dispuestos a secundarla. Dicha estrategia significaba que el proyecto, de inspiración ilustrada, debía abrirse camino sorteando todo tipo de obstáculos. Y estos no faltaron a lo largo de los años treinta. Para empezar, se esperaba que los municipios de la comarca aplicaran la nueva legislación que venía dictada por el gobierno, pero la composición conservadora de los mismos hizo que quedara en papel mojado o se hiciera con grandes dificultades. Así, por ejemplo, en Híjar la maestra se negó a retirar el crucifijo de las aulas, y la prohibición de las procesiones en 1932 y 1933, por orden del gobernador civil, dio lugar a no pocos altercados. El ayuntamiento también se mostró reticente a dedicar una partida para la creación de escuelas que sustituyeran a las que regentaban las monjas de San Vicente de Paúl.

La II República se convirtió así en una especie de utopía, inalcanzable para muchos ciudadanos que, paradójicamente, solo se acercó a los mismos en marzo de 1936 por medio de un decreto. Tras el éxito de las candidaturas del Frente Popular en las elecciones de febrero, el nuevo gobernador civil de Teruel, Domingo Martínez Moreno, de Izquierda Republicana, procedió a la destitución de algunos ayuntamientos, a petición de fuerzas obreras. En Híjar y Albalate del Arzobispo, los ayuntamientos elegidos en abril de 1933 fueron sustituidos por otros de perfil republicano e izquierdista por la fuerza. Algo parecido sucedió en Samper de Calanda, donde Tadeo Laguarda exigió la dimisión del alcalde con el argumento de que «(su) ideal político no se atiene al Frente Popular al que pertenecen la mayoría de los individuos de la corporación».

Fue entonces, con la retirada de los viejos políticos vinculados a la monarquía y al catolicismo, cuando el proyecto republicano pudo abrirse paso. En Samper se abordaron cuestiones como el aumento del jornal de los braceros, el paro obrero y el arreglo de las escuelas de niñas; en Híjar se intentó llevar a cabo una revisión del Reparto de Utilidades para que el pago se hiciera de manera equitativa, en función de la dimensión de las propiedades de cada contri-



Híjar. Antigua escuela de niños

buyente, se planteó el rescate de los bienes comunales que ya habían exigido algunos vecinos en septiembre de 1934, se exigió la constitución de los Jurados Mixtos, la aplicación de la jornada de 8 horas y la creación de una bolsa de trabajo controlada por los grupos obreros. No faltaron los conflictos sociales, como la roturación ilegal de fincas en Híjar, uno de los pocos casos que tuvieron lugar en la región aragonesa durante este período y que terminó con la desestimación de 66 expedientes



Antonio Martín en la plaza Mayor de Vinaceite.
Década de 1920

de legitimación por parte del ayuntamiento. Tampoco contribuyó a la estabilidad social la amenaza de cierre de la azucarera de La Puebla de Híjar por parte de la Sociedad General Azucarera, como consecuencia de la crisis de superproducción que había tenido lugar en 1932. Aunque al final el gobierno intervino para evitar el hundimiento total del sector, se produjo una reducción considerable del precio de la remolacha, lo que redundó negativamente en la economía de la comarca, un aumento del

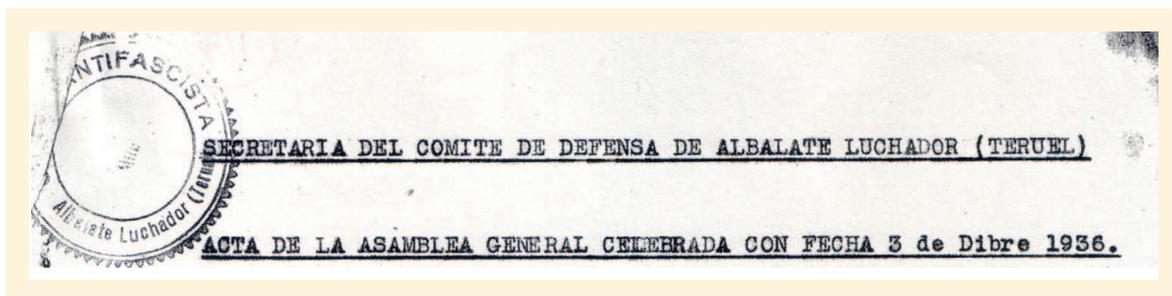
paro obrero y la reducción del terreno cultivable. Y todas estas tensiones sirvieron para alimentar, a la vez que justificar, una reacción que tenía como principal objetivo frenar el proyecto de redistribuir el poder político. Con una Iglesia bien arropada por su base de masas, la comarca del Bajo Martín era ya desde hacía tiempo caldo de cultivo de una fuerte hostilidad hacia el régimen republicano, que nunca había sentido como propio.

El momento de echarla abajo llegó también desde fuera. Solo cinco meses después de que la II República consiguiera abrirse camino en las tierras del Bajo Martín, una sublevación militar intentó ponerle fin. La tarde del 17 de julio se levantó un sector del ejército español en las posesiones del norte de África. En Aragón el día decisivo fue el 19, cuando el general Cabanellas, al frente de la V Región Militar con sede en Zaragoza, se sumó al golpe tras comprobar que contaba con el apoyo de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, la de Asalto y la policía. También le acompañaron en esa aventura las milicias de Falange y el Requeté, expresión de la participación de la sociedad civil en un golpe militar por primera vez en la historia de España. Fueron ellos precisamente, un grupo de falangistas procedentes de Zaragoza, quienes se encargaron de hacerlo efectivo en las localidades del Bajo Martín. En Albalate del Arzobispo, por ejemplo, no lo consiguieron por la oposición que encontraron en las organizaciones políticas y hubo que esperar al día 21 para que una columna del ejército acudiera a esa población y le infligiera «duro castigo». El levantamiento de los militares también iba a ser distinto esta vez por el uso de la violencia para sofocar cualquier conato de resistencia, de manera que muy pronto comenzó a dejar un reguero de víctimas. Parecido sucedió en Híjar, donde la llegada de dos camiones de falangistas, junto al apoyo de la Guardia Civil, hicieron que triunfara la sublevación. El día 21 estrenaba nuevo ayuntamiento, bajo la presidencia de un representante de la autoridad militar, el sargento Juan Mas Salva, y de un nuevo alcalde, Agustín Sorribas, el mismo que había sido depuesto por decreto unos meses antes. Su vuelta venía ahora amparada por la fuerza de las armas, que se imponían sobre la legalidad republicana.

Pocos días duró esa sublevación exitosa en la comarca del Bajo Martín. El golpe había fracasado en las principales capitales españolas, como Barcelona, Valencia y Madrid, al no contar los militares rebeldes con el apoyo de otros sectores del ejército o de las fuerzas de seguridad en sus guarniciones. El resultado fue el colapso del ejército, uno de los pilares fundamentales del Estado republicano. Y, como consecuencia, se hundió también todo el orden que sostenía. El reparto de armas hizo fuertes a las organizaciones obreras, que adquirieron un protagonismo inusitado a la hora de sofocar la rebelión y asumieron el control de la situación. En los últimos días de julio de 1936, el poder estaba en sus manos y miles de voluntarios o militantes respondieron a sus llamamientos para defender a la República. Se formaron así milicias, integradas por obreros, militantes, varones o mujeres, miembros de la guardia civil o de asalto y algunos militares que no habían secundado el golpe. También comités, encargados del abastecimiento, el transporte, el orden público... Había estallado la revolución española, no como resultado de una estrategia diseñada por las organizaciones obreras, sino porque el fracaso de la sublevación militar había provocado el hundimiento de los mecanismos de coerción del estado republicano.

Algunas de esas milicias armadas partieron de Barcelona con el fin de salvar a Zaragoza de las «garras del fascismo». No lo consiguieron, pero en su camino ocuparon una buena parte del territorio aragonés donde los sublevados habían impuesto la ley marcial. Este fue el caso de la comarca del Bajo Martín. Por ella pasaron las columnas de Mena, Carod-Ferrer y Ortiz, que se instaló en La Puebla. La posibilidad de que esta última entrara en Híjar despertó todas las alarmas, hasta el punto de que en esta localidad se formó una comisión para garantizar el orden público. Entre los días 27 y 29 de julio, las localidades vivieron la llegada de las milicias catalanas y, con ellas, la quiebra de los pilares que sustentaban la vida cotidiana desde hacía generaciones: las elites, la propiedad y la religión. En su lugar se formaron comités locales, al amparo de las milicias, que controlaron todos los aspectos de la vida pública, colectivizaron las tierras e impulsaron fuerte oleada de violencia popular revolucionaria.

La violencia, concebida como una fórmula purificadora, dejó su reguero de víctimas a lo largo del verano de 1936. Al final fueron 153 los hombres y mujeres que fueron asesinados, entre ellos, la mayoría, labradores, campesinos, políticos derechistas, comerciantes..., pero también, en un número significativo, jornaleros, pastores, albañiles, así como representantes de una amplia gama de oficios, como herreros, alpargateros o carpinteros. Sus vínculos al poder establecido, a través de unas estrechas relaciones con la propiedad, con independencia de su dimensión, la religión o los caciques de la localidad, les situaron en el punto de mira. Y a pesar de que la Iglesia fue uno de los objetivos preferentes de las milicias, en esta comarca de religiosidad exacerbada solo 2 sacerdotes, 1 sacristán y 2 seminaristas de Albalate perdieron la vida. Salvo algunas excepciones, la mayor parte de las muertes tuvieron lugar en los meses de agosto y septiembre de 1936, y las víctimas se concentraron en las tres localidades principales: 47 en Albalate, 44 en Híjar y 31 en Samper. Les siguieron, a bastante distancia, los 13 de La Puebla y los 12 de Urrea de Gaén.



La colectivización estuvo lejos de ser el producto de la decisión espontánea de los campesinos de la zona. Aunque existieron debates acerca de cómo llevarla a cabo, fue la presencia de las milicias, con la fuerza que les conferían las armas, los que garantizaron este proceso, no exento de tensiones y debates internos. Las tierras de los grandes propietarios, participantes en la sublevación o afines a ella, fueron incautadas. En eso todos estuvieron de acuerdo, pero no en la obligatoriedad de que los pequeños campesinos dispusieran sus tierras para el trabajo colectivo. Y, si bien al final, tanto la UGT como la CNT aceptaron respetar las propiedades que podían ser trabajadas por un campesino, sin tener que recurrir a la contratación de jornaleros, las dinámicas que se desplegaron en algunas localidades ponen de manifiesto la diversidad de pareceres acerca de esta cuestión. Así, por ejemplo, el 11 de octubre se constituyó el Comité de Defensa y la colectividad en Albalate, que ya no era «del Arzobispo», sino «Luchador». Previamente, el 21 de septiembre, se había realizado una asamblea en la que participaron los militantes de las organizaciones obreras para discutir cómo administrar el pueblo y las formas de trabajar las tierras incautadas. Las discusiones continuaron en diciembre, cuando esa misma asamblea declaró abolida propiedad privada.

La República se enfrentó así a una coyuntura tremendamente adversa. No solo tenía que luchar en los frentes contra el ejército de África y las potencias fascistas, Alemania e Italia, que le apoyaban. Las milicias y los comités hicieron de su autoridad papel mojado durante meses. La CNT, la fuerza predominante en la comarca del Bajo Martín, al igual que en toda la retaguardia aragonesa, también tuvo que afrontar algunos dilemas. Si el colapso de los viejos pilares del estado había permitido desencadenar una revolución, fue consciente de que pasados los meses del verano de 1936 era imprescindible construir un orden alternativo para consolidar esas conquistas. El resultado fue la constitución en Caspe del único órgano de gobierno que emanaba de las fuerzas revolucionarias, el Consejo de Aragón, aceptado en diciembre de 1936 por el gobierno republicano de Largo Caballero, y la reconstrucción de los poderes locales. Los comités se disolvieron para nombrar los consejos municipales. La utopía libertaria parecía haberse hecho realidad, pero en un momento crucial de la historia que imponía la necesidad de atender a las urgencias de la guerra. Y con ellas llegó la obsesión por el orden, establecido «desde arriba» por los nuevos contrapoderes locales, así como el sometimiento de las milicias a la disciplina militar y su transformación en divisiones del Ejército Popular. La presencia de la División Juvert agudizó la sensación de que la comarca había sido invadida por jóvenes milicianos, ahora soldados, que venían de otro lugar y hablaban otra lengua, efectuaban requisas y controles y, además, eran responsables de la muerte de más de un centenar de vecinos.

Desde la primavera de 1937 se aceleraron las tendencias centralizadoras de la República en guerra. Como resultado, el Consejo de Aragón fue disuelto en agosto, también por la fuerza, con la llegada de la División XI al mando de Líster. Las colectividades fueron disueltas y el poder de la CNT aniquilado. Pero el Bajo Martín siguió casi un año más siendo territorio leal a la República. El declive de la CNT permitió la recuperación del socialismo, captado por un cada vez más poderoso Partido Comunista, y las agrupaciones que encuadraban a la población civil proliferaron. Albalate, Híjar, La Puebla, Vinaceite y Urrea de Gaén contaron con una, y esta última localidad, además, con un «Grupo Femenino» que ponía de manifiesto cómo las mujeres también participaban de manera activa en la defensa de la República.

En marzo de 1938 el avance del ejército franquista inauguraba una nueva etapa de la guerra en el frente de Aragón. Allí por donde pasaron, las tropas dejaron un reguero de desolación. La acción de la infantería y la artillería se complementó con la de la aviación, que alemanes e italianos se encargaron de reforzar. Y si Albalate ya había sido bombardeada el 21 de julio de 1936 con aviones Breguet XIX traídos desde Logroño, en marzo de 1937 Híjar experimentó en ocho ocasiones el efecto devastador de las bombas. Más de 30 civiles morirían, algunos asfixiados en un refugio cegado por una bomba que explotó en la entrada del mismo. La «Cruzada» continuaba su marcha imparable para «liberar del yugo marxista» a la mitad oriental de la región. El objetivo era llegar al Mediterráneo, para dividir en dos los territorios que todavía controlaba la República y debilitarla de manera definitiva. Pero, de paso, el ejército seguía con su política de aniquilación del enemigo, un método que los africanistas tenían bien ensayado desde las guerras de Marruecos. Se inició entonces la segunda fase de esa masacre que se llevó por delante las vidas de más de 8.500 aragoneses. La primera había tenido lugar en el verano y el otoño de 1936, en las zonas que permanecieron en poder de los sublevados desde el primer momento. Ahora llegaba la ocasión de continuar con la purga en las zonas ocupadas por las milicias.

El panorama, sin embargo, resultó más complejo que en las primeras fases de la guerra. Muchos consiguieron huir o fueron evacuados ante el avance del ejército hacia Cataluña o el Levante. Su momento llegaría cuando, acabada la guerra, decidieran volver a sus hogares y encontraran un recibimiento poco caluroso. Pero ahora, a las fisuras ya abiertas durante la etapa republicana por las



Albalate del Arzobispo. Polvorín



Híjar. Efectos de los bombardeos (1942)

tensiones acumuladas, había que añadir las heridas ocasionadas en la sociedad civil por las milicias y por los comités, que integraban los vecinos de la localidad. Si la purga de los elementos incómodos era uno de los objetivos de los militares rebeldes, ahora se completó con unos deseos de venganza exacerbados y un sentimiento de triunfalismo que permanecería indeleble durante décadas. Las dificultades para efectuar el recuento de víctimas de la represión franquista son todavía hoy considera-

bles. Muchas no fueron registradas y se desconoce dónde fueron enterrados sus cuerpos. La suma de los fusilados, probablemente incompleta, asciende a 46 en todas las localidades de la comarca, siendo Samper de Calanda, Albalate del Arzobispo e Híjar las localidades que registraron un número mayor con 12, 11 y 9 víctimas respectivamente.

Lo que resultó fue una sociedad dividida en vencedores y vencidos. Los primeros, reconfortados con la Victoria, la legitimidad que le otorgaba la Iglesia católica y el monopolio del control de las instituciones locales, tuvieron las manos libres para reconstruir la sociedad de posguerra a su antojo. El destino de los vencidos se repartió entre los que abandonaron el pueblo para siempre y cruzaron la frontera camino del exilio y los que fueron ejecutados en la cárcel de Torrero tras pasar varios meses o años de encarcelamiento, como Tomás Gardana y Florencio París, de Albalate, Antonio López y Francisco Gracia de Samper de Calanda, Antonio Meseguer y José Escorihuela Mir de Híjar, así como Antonio Blasco de Urrea de Gaén. De ellos y de sus particulares historias, donde la militancia activa en la izquierda y el apoyo a la República se mezclaba con los ajustes de cuentas y las venganzas personales, tenemos noticias gracias a las memorias de Gumersindo de Estella, el fraile capuchino que fue capellán de la prisión y que los atendía en sus últimos momentos.

Otros optaron por continuar viviendo en sus localidades. En realidad no fue tanto vivir como sobrevivir en unas condiciones adversas desde el punto de vista moral y material. Lo primero fue restablecer el orden de siempre, la propiedad y la religión. En todos los municipios las autoridades locales, como el alcalde, el secretario del ayuntamiento, el jefe local de Falange y un representante de los propietarios integraron las Comisiones de Recuperación Agrícola para devolver las tierras incautadas a sus antiguos propietarios. Para restablecer el orden también sirvieron las propiedades de los «rojos huidos», que fueron reunidas en locales para decidir cómo y a quién se asignaban, y el importe del alquiler de sus casas abandonadas, que, como sucedió en Híjar, fue a parar a una comisión integrada por tres concejales.

Las actas municipales de la capital de la comarca constituyen un magnífico ejemplo de cómo se articularon las relaciones de poder en la posguerra en el seno de las

pequeñas comunidades rurales. El nuevo ayuntamiento franquista decidió que los objetos fueran repartidos a las víctimas del «terror rojo» y a los pobres de solemnidad, así como a «aquéllos que por su conducta política fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto». Los «rojos» fueron señalados con el dedo y marginados en esa nueva sociedad de posguerra, convenientemente purificada. Se les prohibió labrar sardas y se les obligó a trabajar gratuitamente para limpiar la casa de las monjas o para acarrear la leña destinada a la cocina de Auxilio Social. También tuvieron que retirar los escombros producidos por los bombardeos de la aviación franquista o para construir el monumento a los Caídos. Se les retuvo el dinero, previamente incautado, en una cuenta corriente del Banco de Crédito destinado a arreglar el local de la escuela de párvulos, el de las monjas de San Vicente de Paúl y la iglesia de Santa María la Mayor.



Híjar. La plaza en 1942

Es una buena muestra de las múltiples formas que adquirió la represión de la posguerra y de cómo la sociedad civil se implicó en la misma. Aparte de estas decisiones, que venían impulsadas por las autoridades locales, hubo también que aplicar la legislación que dictaba el gobierno franquista. Los maestros y funcionarios de la comarca tuvieron que someterse a la depuración de su trayectoria profesional al término de la guerra civil. Además, la Ley de Reponsabilidades Políticas, de febrero de 1939, vino a completar las labores que durante la guerra habían realizado las Comisiones provinciales de Incautación que venían operando desde principios de 1937. En virtud de esta ley, que sancionaba cualquier muestra de desafección al «Glorioso Movimiento Nacional» desde octubre de 1934, se abrió expediente a casi 2.000 vecinos de la provincia de Teruel. Entre ellos a Miguel Lorén, de Híjar, a José Blasco y a Felipe Agorreta, de Urrea de Gaén. Este último, ugetista que había sido presidente del comité y de la Agrupación Socialista local, tuvo que afrontar una multa de 2.500 pesetas y 12 años de inhabilitación profesional y de destierro, sin poderse acercar al pueblo más allá de 100 km a la redonda. A esta sentencia contribuyeron los informes elaborados por el cura párroco, el jefe del puesto de la Guardia Civil, el jefe local de Falange y el alcalde de la localidad. No fue esta la única vía para que los vecinos de orden se implicaran en las «políticas de la venganza». La Causa General, abierta en abril de 1940 por el Ministerio de Justicia, puso en marcha una dinámica delatora que ningún estado experimentó tras una guerra civil. A todos los familiares de las víctimas de la violencia popular revolucionaria, así como cualquiera que tuviera, o dijera tener, conocimientos sobre lo acaecido en el pueblo durante la «dominación marxista», se les brindó la oportunidad de acudir a las autoridades señaladas a tal efecto a dar los nombres de los vecinos responsables, muchos ya muertos o en exilio. La Causa General constituye quizá uno de los mejores ejemplos de cómo tras la guerra el «Nuevo Estado» puso al alcance de la sociedad civil los mecanismos para la expulsión física y simbólica de los que eran



Híjar. El matadero fue realizado por Regiones Devastadas en 1943 y 1944

última, se creó el servicio de Regiones Devastadas, que adoptó a localidades de la comarca como Híjar en 1942 para levantar de las ruinas que ellos mismos habían provocado una larga lista de edificios. Dicho servicio, que fue acompañado de una buena dosis de propaganda, contribuyó a crear la imagen de una España que renacía gloriosa después de haber estado sumida en el caos y en la destrucción durante años. Y junto a esta fórmula regeneradora, había otras no menos eficaces. Se erigieron monumentos a los mártires de la Cruzada y a los caídos en la guerra «por Dios y por España», que siempre estuvieron presentes en las oraciones de las ceremonias religiosas. De su recuerdo se apropiaron la Iglesia y las autoridades civiles, fundidas en una cómplice alianza desde hacía ya tiempo, que aprovecharon la ocasión para iniciar una recatolización de la sociedad sin precedentes. De ella fueron buena muestra las acciones de gracias o las peregrinaciones a la Virgen del Pilar, actos de masas por excelencia.

La dictadura sumió a los pueblos de la comarca en un sopor del que tardarían mucho en despertar. Los ayuntamientos quedaron sometidos a la autoridad suprema del gobernador civil y, por lo tanto, con muy poco margen de maniobra para la toma de decisiones. La sumisión y la jerarquización serían las constantes que presidieran el ejercicio del poder a partir de 1939. Entre los políticos franquistas había hombres que procedían de la derecha de siempre, esa que con tanta claridad había estado conectada con el poder económico y social que otorgaba la propiedad. Pero junto a ellos aparecieron también otros rostros menos conocidos, los que tuvieron la oportunidad de ascender de la mano del partido único, FET de las JONS, o buscaban en el cargo público la reparación de los males sufridos durante la guerra, como los excombatientes o los excautivos. Unos y otros se fundieron en una nueva clase política definida por la fidelidad inquebrantable al régimen durante cuatro largas décadas.

La dictadura, implacable en la esfera de la política, admitió, sin embargo, algunos cambios en la económica, que propiciaron la transformación de la sociedad. A la comarca del Bajo Martín dichos cambios le afectaron solo de refilón. Una tímida industrialización, a través de la empresa ENCASO de explotación minera, empleó a

considerados ahora miembros de la «Anti-España».

Si la participación de los vecinos de orden fue crucial para el afianzamiento de la victoria, el régimen de Franco elaboró un discurso legitimador que insistía en la vesania de las «hordas rojas» y en la necesidad de iniciar un proceso de reconstrucción, de dimensiones múltiples: moral y espiritual, ante todo, pero también material. Para dar forma a esta

algunos vecinos de La Puebla de Híjar, pero no pudo frenar el creciente proceso migratorio que estaban experimentando las zonas rurales. Tampoco la capitalización de la agricultura, que solo pudieron asumir los campesinos más acomodados. Salir adelante en la nueva coyuntura exigía una inversión considerable para adquirir los nuevos instrumentos mecánicos, como las segadoras, las trilladoras o los tractores. La tierra dejó de ser una fuente de poder social que rodeaba de un aura especial a quienes lo poseían, para convertirse en un negocio más con el que ganarse la vida. Pero no todos pudieron hacer frente a estos cambios. Unos se convirtieron en asalariados agrícolas, otros tomaron el camino de la migración. Fue así, a través de la capitalización del campo, como los viejos problemas en

torno a la propiedad de la tierra, que habían quedado irresueltos con el fin de la II República, dejaron de ser un foco de tensiones sociales.

Fueron también estas peculiares transformaciones sociales las que hicieron que, tras la muerte del dictador y el restablecimiento de la democracia, las heridas de la guerra civil siguieran abiertas. Es cierto que en todas partes se impuso la «amnesia colectiva», el «pacto de silencio», porque no convenía recordar los episodios más trágicos del pasado mientras se estaba construyendo una nueva convivencia entre todos los españoles. Pero en la comarca, al igual que en otras zonas rurales, una serie de factores dificultaron la elaboración de una memoria del pasado alternativa a la construida por los vencedores en la guerra y perpetuada por sus herederos. Así, a la tradición derechista bien arraigada, al catolicismo exultante y a los estragos del «terror rojo» había que sumar la atrofia del tejido social que se experimentó en los años del desarrollismo. Porque los que emigraban salían del pueblo para no volver, sin que a cambio llegara savia nueva, cargada de nuevos referentes o experiencias que empezaban a acumularse en las zonas urbanas. Las divisiones, montadas sobre las heridas abiertas en los años centrales del siglo, quedaron fijadas sin apenas posibilidad de cicatrizar. Es esta una tarea pendiente para el siglo XXI, que solo culminará cuando se abra camino el conocimiento riguroso de nuestro pasado más incómodo.



Samper de Calanda. Trilladora (fabricante: Ajuria-Vitoria)

Bibliografía

CASANOVA NUEZ, Esther, *Teruel, 1936-1938. La violencia contra el orden social durante la guerra civil*, Memoria de Licenciatura inédita, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, 1999.

CASANOVA RUIZ, Julián, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa (1936-1938)*, Siglo XXI, Madrid, 1985.

CASANOVA RUIZ, Julián, CENARRO LAGUNAS, Ángela, CIFUENTES CHUECA, Julita, MALUENDA PONS, María Pilar y SALOMÓN CHÉLIZ, María Pilar, *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*, Mira Editores, Zaragoza, 1999 (2ª edición revisada).

ESTELLA, Gumersindo de, *Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos*, Mira editores, Zaragoza, 2003.

FRÍAS CORREDOR, Carmen, «Elecciones y conservadurismo político en el distrito de Alcañiz-Híjar entre 1900 y 1923», en Pedro RÚJULA LÓPEZ (coord.), *Entre el orden de los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XX*, Grupo de Estudios Masinos, 1997, pp. 23-36.

GERMÁN ZUBERO, Luis, *Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984.

MALDONADO MOYA, José M.ª, *Los bombardeos aéreos y la guerra civil en Aragón*, Tesis doctoral inédita, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, 2006.

MARQUESÁN MILLÁN, Cándido, *La II República en Híjar. El fracaso de una ilusión*, Centro de Estudios del Bajo Martín, Híjar, 2001.

—, «La represión franquista en Híjar. Teruel» (<http://www247.lx4.servidornet.com//historia/represion.php>).

PINA PIQUER, José Manuel, *De ilusiones y tragedias. Historia de Albalate del Arzobispo*, Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, 2001.

RÚJULA LÓPEZ, Pedro, «Entre el ocio y la política. Los casinos políticos como espacio de sociabilidad (1917-1937)», en Pedro RÚJULA LÓPEZ (coord.), *Entre el orden de los propietarios y los sueños de rebeldía*, Grupo de Estudios Masinos, 1997, pp. 49-66.

SABIO ALCUTÉN, Alberto, *A las puertas de la memoria. La historia local en Samper de Calanda (1850-1970)*, Ayuntamiento de Samper de Calanda, Instituto de Estudios Turolenses y Centro de Estudios del Bajo Aragón, 1997.

SIERRA BARRERAS, Román, *Jornaleros, azucareros y ferroviarios. La Puebla de Híjar (1931-1938)*, Trabajo de investigación inédito, Universidad de Zaragoza, 2005.

VILLANUEVA HERRERO, José Ramón, «El período electoral constituyente republicano en el Bajo Aragón (abril-junio 1931). Una aproximación desde el republicanismo de izquierdas», en Pedro RÚJULA LÓPEZ (coord.), *Entre el orden de los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XX*, Grupo de Estudios Masinos, 1997, pp. 67-88.



Documentación:

Archivo de la Guerra Civil Española, PS-Aragón, caja R, legajo 8.
Archivo Histórico Provincial de Teruel, Fondo de Responsabilidades Políticas, expediente 210/2.
Fundación Pablo Iglesias, PSOE-CE, Correspondencia Teruel, AH (varias firmas).